

rios efectos de ropa aprehendidos á las siete y media de la noche del día 22 de Diciembre de 1872, por celadores del resguardo marítimo de Matamoras, al C. Juan Uribe, quien los extraña de dicha ciudad sin documento alguno aduanal y sin conocimiento de los empleados respectivos; y no encontrando mérito alguno para la responsabilidad por razon del procedimiento ni de lo resuelto en dicho juicio, dijo: que de conformidad con el dictámen del C. Promotor fiscal, debía dar y dió por revisada la sentencia de 19 de Octubre del año próximo pasado con que aquel se terminó, y en la que se impuso la pena de comiso á los repetidos efectos, declarando que el C. Juez que la dictó, no ha incurrido en responsabilidad alguna.

Notifíquese al C. Promotor fiscal; y sacándose copias de este auto para remitir al Ministerio de Justicia, á la redaccion del Semanario Judicial, al Juzgado de distrito en Matamoras y á la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, á quien se adjuntará tambien copia de la sentencia revisada, archívense las diligencias.

El C. Lic. Rafael Treviño y Garza, Magistrado del Tribunal de Circuito de Nuevo Leon, Coahuila y Tamaulipas, así lo decretó, mandó y firmó, por ante mí. Doy fé. Firmados.—*Lic. Rafael Treviño y Garza*—*Amado Valdez*, secretario.

Es copia que certifico. Monterey, á 20 de Enero de 1874.—*Amado Valdez*, secretario.

CRIMINAL.

Juicio seguido en el Juzgado de Distrito de Jalisco contra D. Caralampio Cabrera, sobre cobro de una cantidad que adeuda por producto de la contribucion de 25 por ciento adicional.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL DEL JUZGADO DE DISTRITO.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal en autos con el Sr. D. Caralampio Cabrera sobre ejecucion de la sentencia que ese Juzgado pronunció en 15 de Marzo del año anterior, condenándolo á pagar cuatro mil cincuenta y dos pesos quince centavos, cuya sentencia causó ejecutoria por haberse pronunciado conforme de toda conformidad, la que la revisó en 16 de Mayo último, siendo el estado de tales autos alegar sobre las pruebas producidas por la parte demandada, el que habla expone:

El Sr. Cabrera, por medio de su abogado el Sr. Lic. D. Francisco O' Reilly, se opuso á la ejecucion contra él librada, alegando la excepcion de pago, la cual le fué admitida é intentó probarla con once cortes de caja practicados por el mismo, correspondientes á los meses de Julio de 1869 á 14 de Mayo del año próximo pasado, con una comunicacion de la Direccion general de rentas al gobierno de este Estado, contraída á que en los cortes de caja no apareciera en lo futuro ninguna existencia virtual, motivada por falta de documentos de pago que no hubiere extendido la Gefatura Superior de Hacienda, á cuyo efecto disponia la Direccion de rentas se diera salida con cargo á la misma Gefatura, á esa existencia imaginaria; y con la copia de una Orden de la propia Direccion de 25 de Enero de 1867, en la cual se mandó que la contribucion de 25 por ciento adicional, se

cohrará en dinero y no en papel, mientras no se dispusiera lo contrario.

La virtud probatoria de esos documentos y la legalidad de los actos del Sr. Cabrera, pretende demostrarla su abogado patrono en su escrito de 25 del mes anterior, con los siguientes argumentos:

Creo el Sr. O' Reilly que siendo el Sr. Cabrera empleado de este Estado y no sujeto por lo mismo á la Gefatura Superior de Hacienda, toda infraccion que cometiera contra la ley de 16 de Diciembre de 1861, en cumplimiento de órdenes superiores que se le hubieren comunicado, sería de la responsabilidad del Gobierno del Estado, por que de lo contrario se insidiria en el absurdo de que en todo caso, obrara de un modo ó del contrario, resultaria culpable haciéndose reo de peculado por infringir aquella ley, ó mereciendo el castigo que le impusieran sus superiores inmediatos, por la fiel observancia de la misma. Creo que teniendo presente esta consideracion se le absolverá del cargo al demandado, aun siendo el Estado deudor de la federacion, y con mucha mas razon cuando la federacion es deudora al Estado.

Afirma el Sr. O' Reilly que si la glosa que la Gefatura Superior de Hacienda hizo de 14 cortes de caja la hubiera verificado de todo el tiempo que estuvo á su cargo la administracion de Ciudad Guzman, habria advertido que ha enterado mayor cantidad de la que recaudó, y esto lo quiere hacer evidente con un ejemplo material, suponiendo que no habria razon para que el que habla le cohrara á su deudor una cantidad que se obligó á pagar en algunos periodos, en los cuales entregó unas veces mas y otras menos de lo que importaban los abonos, pero resultando que al fin del plazo el deudor habia enterado mas de lo que debia.

Sentada esa base, formada la cuenta general del Sr. Cabrera, de la cual á su juicio resulta, que la federacion recibió \$ 17,222 67 cs. mas de lo que le corres-

ponde, por lo recaudado de sus rentas de Ciudad Guzman. Para comprobar esa cuenta, hizo que el Juzgado pidiera á la Gefatura de Hacienda los cortes de caja que faltaban en los autos, y que corresponden á los meses ulteriores que estuvo á cargo del Sr. Cabrera la Administracion de rentas de aquel lugar.

De aqui deduce el Sr. O' Reilly que la glosa de la Gefatura no es exacta, y que los errores que él le nota y ha demostrado, no pueden convertir al acreedor en deudor de la federacion.

El que suscribe no ha estado ni está conforme con el procedimiento que se ha seguido para ejecutar la sentencia de 16 de Mayo último, por que no cree que para hacerlo inmediatamente despues de pronunciada, como ha sucedido, sea necesario observar todos los trámites y solemnidades de un juicio ejecutivo; por esto se opuso á que se admitiera excepcion alguna al deudor, que no importara pago hecho despues de pronunciada aquella sentencia.

Es una verdad que no puede contradecirse, que las sentencias que causan ejecutoria ó han pasado en autoridad de cosa juzgada, constituyen instrumentos ejecutivos, cuyas obligaciones que entrañan no pueden legalmente hacerse efectivas, sino es por medio del procedimiento sumario de esa naturaleza; pero esto debe entenderse respecto de aquellas sentencias pronunciadas ha mucho tiempo, y para alegar excepciones motivadas por hechos acontecidos con posterioridad á la falta en que se hayan dictado. Alegar una excepcion de que se pudo y debió hacer uso en el juicio ordinario, para combatir en un procedimiento ejecutivo la sentencia pronunciada en el otro, no es posible, por que se le coloca al Juez en la necesidad absoluta de resolver el negocio en un solo sentido, en el de confirmar la sentencia que pronunció en el juicio ordinario, supuesto que él no tiene poder para revocarla ni para declarar que no existe la obligacion que la misma contiene.

Sabido es que las leyes, en el comun de los casos, atendiendo á lo angustiado del término probatorio que tienen señalado en el juicio ejecutivo, permiten que contra la sentencia que en él se pronuncie pucta el ejecutado deducir su excepcion, que no pudo probar, intentando el procedimiento ordinario. Nos ocupamos de un juicio ejecutivo, en el cual el Sr. Cabrera no ha gozado un largo término para demostrar su excepcion; concluido este juicio por ese motivo ¿podría pretender que de nuevo se le oyera en vía ordinaria para invalidar la sentencia de remate? á ser ciertos los precedentes sentados en esta actuacion, nadie podría dudar el buen derecho con que se pretendiera tal cosa. ¿Que hacer entonces para ejecutar la sentencia adversa al Sr. Cabrera que se pronunciara en ese juicio ordinario? ¿seguir otro juicio ejecutivo? ¿y tras este vendria otro ordinario y luego otro ejecutivo? ¿cual entónces seria el fin de todas las contiendas, cuales los medios eficaces para hacer cierto y efectivo el cumplimiento de las obligaciones?

La sentencia que se pronunció en 15 de Marzo de 1870 y su confirmacion de 16 de Mayo último, no están fundadas como el Sr. O' Reilly asegura, en solo la glosa de la Gefatura Superior de Hacienda; descansan principalmente en la repetida confesion que el demandado ha hecho de su adeudo. En Febrero de 1869, recaudó \$ 971 51 cs. por contribucion federal, y en 10 de Marzo inmediato, en comunicacion dirigida á la Gefatura superior de Hacienda visible á fojas 105 de los autos, se escusa de no haber enterado esa cantidad en la oficina respectiva, por no haber sellos en que invertirla para hacer el entero conforme lo manda la ley. En 14 de Mayo siguiente, comunicacion visible á fojas 113, le confiesa á la Gefatura de Hacienda que tiene en su poder una cantidad del producto de la contribucion federal, que espera cambiarla por sellos, cuando los haya, para enterarlos amortizados. En 26 del mismo Mayo, á las reclamacio-

nes que le hacia la Gefatura Superior de Hacienda, viendo por lo que aparecia en los cortes de caja de los meses corrientes que no enteraba lo que recaudaba, pretendió disculparse en su comunicacion que aparece á fojas 119 y 120, con que en un tiempo el General en jefe disponia de toda la recaudacion; que despues esta se hacia en dinero y no en papel, á virtud de órdenes del Gobierno del Estado, y terminaba confesando deber cuatro mil ciento cuarenta y cuatro pesos treinta y un centaves.

En 26 de Agosto de 1869, se le emplazó por segunda vez para que compareciera por sí ó por apoderado instruido y expensado, á contestar la demanda puesta en su contra en 8 de Junio anterior; al hacerle el emplazamiento se le dió noticia literal del contenido de la demanda, y respondió que habia nombrado por su apoderado al Sr. Lic. D. Urbano Gomez, á quien, como es natural, le habia dado las instrucciones correspondientes. El Sr. Gomez aceptando ese mandato, se apersonó á defender al Sr. Cabrera, y en 7 de Enero siguiente confesó en ese mismo juzgado, con toda libertad y con todas las solemnidades legales, el adeudo del Sr. Cabrera, ofreciendo satisfacerlo á los quince dias de aquella fecha. Estas dos diligencias se encuentran á fojas 132, 144 y 145 de los autos.

Aqui deberia concluir el que habla este alegato, supuesto que no admite que las sentencias definitivas pronunciadas en juicio ordinario contra el Sr. Cabrera, fundadas principalmente en la confesion del demandado, puedan impugnarse en este procedimiento, cuyo objeto exclusivo es ejecutarlas. Sin embargo, como los documentos aducidos por el Sr. O' Reilly y los argumentos que expone no invalidan absolutamente, á juicio del que suscribe, los fundamentos de aquellas sentencias, no tiene inconveniente para ocuparse de contestarlas.

La comunicacion de la Direccion de rentas al Gobierno de este Estado de 12 de Mayo de 1870, publicada en el número 498

del tomo 99 del País, no disponia otra cosa sino que en lo futuro los empleados en sus cortes de caja no sentaran como principio de ellos la partida imaginaria de *existencia del mes anterior*, tanto; y que lo dieran salida de cualquiera manera con cargo á la Gefatura Superior de Hacienda, tuvieran ó no certificados de entero.

Tratándose de contribucion federal, las Gefaturas de Hacienda no tienen mas atribuciones respecto de su recaudacion, que las señaladas en el artículo 13 de la ley de 16 de de 1861, las cuales se reducen á comparar la noticia de sellos amortizados que les dé la administracion principal de papel sellado, con la recaudacion hecha y que aparece en los cortes de caja, á fin de que provean al exacto cumplimiento de la ley, cuando noten que se infringe.

Como esa contribucion ha de pagarse forzosamente en papel, el cual deberá amortizarse en el acto de recibirlo, segun lo dispone el artículo 2 de la ley citada, y dicho papel se ha de devolver á la oficina de su administracion, sea por medio de los recaudadores directamente ó por conducto de sus superiores; las Gefaturas Superiores de Hacienda no tienen que dar certificados de entero, y por lo mismo no tenia caso en esta parte, la disposicion de la Direccion general de rentas de 12 de Mayo de 1870.

La supresion en lo futuro de la existencia virtual que ponian los recaudadores en sus cortes de caja, en nada aprovecha al Sr. Cabrera ni pudo motivar ningun error en la Gefatura de Hacienda, por que en los anteriores cortes de caja tuvo los antecedentes necesarios para formar con exactitud la cuenta que le formó el Sr. Cabrera.

Y no obró la Gefatura truncando épocas, sea por malicia ó por torpeza, por lo cual haya resultado que el Sr. Cabrera debe la cantidad que se le reclama. Si se le cobra lo que aparece deber en los cuarenta cortes de caja que obran en el expediente, resultaría en su contra una cantidad mucho mayor de lo que se le demanda. Recaudó

en cuarenta meses transcurridos desde Enero de 1867 á Mayo de 1870, treinta y ocho mil doscientos cuatro pesos treinta y cuatro centavos, y enteró en el transcurso de esos meses, veintitres mil quinientos treinta y seis pesos cuarenta y ocho centavos; entre cuyas cantidades hay por consiguiente una diferencia de catorce mil seiscientos sesenta y siete pesos ochenta y seis centavos; ¿por qué en vez de esta solo se le han demandado cuatro mil quinientos trece pesos treinta y un centavos, que es la suma que á juicio de la Gefatura adeudaba el Sr. Cabrera? El que habla lo ignora y no tiene obligacion de saberlo, por que su deber se contrae á cobrar judicialmente las cantidades que la Gefatura de Hacienda le diga se le adeudan al Erario, dándole documentos ó antecedentes con qué justificar la verdadera existencia de esos adeudos.

Esos cuarenta cortes de caja que son los antecedentes que estraña el Sr. O' Reilly que no se hayan tenido presentes al hacer la glosa de las cuentas de su favorecido, en vez de aprovecharle le perjudicarían, si hubiésemos de atenernos al resultado que den esos documentos. Efectivamente, ya en Enero de 1868 el Sr. Cabrera adeudada una cantidad, la cual fué creciendo porque de ese mes á Diciembre del propio año no enteró lo que recaudó; habiendo habido muchos meses como los de Marzo, Mayo, Junio y Agosto, en que no hizo entero alguno, y lo mismo aconteció en la recaudacion de Febrero de 1869.

Para obrar así el Sr. Cabrera no tuvo disculpa alguna, porque cuando dijo en 10 de Marzo de 1869, comunicacion de la foja 105, que no habia sellos en Ciudad Guzman, se dictó oportunamente por la Gefatura Superior de Hacienda, en 13 del mismo mes, (comunicacion de fojas 107) la órden respectiva para que la administracion principal de papel sellado proveyera de sellos á la subalterna de Ciudad Guzman; y averiguada la verdad del aserto del Sr. Cabrera, resultó segun aparece á la foja 108, que ha-

bía la existencia necesaria de papel federal en aquella oficina.

Notando la Gefatura Superior de Hacienda los abusos que cometía el Sr. Cabrera no haciendo la recaudacion en papel y no enterando su producto, le previno en 14 de Abril y 11 de Mayo de 1869 que enterara todo lo que recaudara y que hiciera la recaudacion en papel (comunicacion que se vó á fojas 111 y 115) á lo cual respondió, confesando que tenía una existencia por producto de recaudacion en su poder, y se excusaba de no haberla enterado con el motivo falso de falta de sellos.

Apesar de esto la Gefatura continuó tratándolo con exceso de consideraciones, y se limitó á preguntarle en 21 de Mayo, por qué aparecía en su contra la cantidad de cuatro mil quinientos trece pesos treinta y un centavos, (comunicacion de fojas 118); esta comunicacion constituyó al Sr. Cabrera en una situacion verdaderamente difícil, la cual no le fué fácil allanar; respondió diciendo que el General en Jefe del Ejército disponia en un tiempo del producto íntegro de todas las rentas, y que despues la recaudacion se hizo en numcrario, por haberlo así dispuesto el Gobierno del Estado; pero como de lo que se trataba era de averiguar el motivo de su adeudo y con esas respuestas no saldaba su cuenta, terminó confesando deber cuatro mil quinientos trece pesos treinta y un centavos (comunicacion de fojas 119 y 120.)

Como este procedimiento es de un carácter esencialmente civil, no hay necesidad de que el que habla se ocupe de tratar la culpabilidad del Sr. Cabrera, que le resulte por haber hecho la recaudacion en numcrario; y no estando demostrada la excepcion con que se ha opuesto á la ejecucion decretada, el C. Promotor concluye pidiendo que se resuelva: que prosiga la ejecucion hasta hacer pago á la Hacienda pública de la cantidad que le debe el Sr. Cabrera, y para cubrir las costas del juicio.

Guadalajara, Noviembre 13 de 1871.—

Firmado.—*Juan Robles Martínez.*

Es copia. Guadalajara, Noviembre 13 de 1871.—*Juan Robles Martínez.*

Sentencia del Juzgado de Distrito.

Guadalajara, Febrero 14 de 1872.—Vistos: El C. Promotor fiscal de la federacion pidió ejecucion de la sentencia de segunda instancia pronunciada por el Superior Tribunal de Circuito en 16 de Mayo de 1871, contra D. Caralampio Cabrera, por cuya sentencia fué condenado este á pagar cuatro mil cincuenta y dos pesos quince centavos.

El actor apoyó su demanda en la sentencia referida, que se registra de la foja 187 á la 189 de estos autos, y es la de segunda instancia, en que esta causó ejecutoria, segun lo resuelto por el mismo Tribunal Superior, por su providencia que se vó de la foja 191 á la 192.

Este Juzgado de Distrito por auto de 24 de Julio último, fojas 199 frente y vuelta, decretó la ejecucion contra Cabrera, á virtud de aquella ejecutoria; y practicados el requerimiento de pago, embargo de bienes y notificacion de estado, se opuso el deudor á la ejecucion representado por su apoderado el C. Lic. Francisco O' Reilly, quien opuso la excepcion de pago, que le fué admitida, cserito y providencia de fojas 217 frente.

Opuesta esa excepcion, se recibió el negocio á prueba por el término legal, durante el que rindió el ejecutado las que se registran desde la foja 223 hasta la 241, consistentes en una comunicacion de la direccion *general* de rentas, documento que impreso corre en el número 498, tomo 97 del periódico oficial "el País," en un certificado del *Administrador* de rentas de Ciudad Guzman, fojas 225 frente, y en los cortes de caja que obran de la foja 231 á la 241 de este espediente.

El apoderado del ejecutado, por sus escritos de fojas 226 á 228 refiriéndose á las

pruebas rendidas; y por su alegato de fojas 253 á 255, pretende haber probado bien la excepcion de pago que opuso en el juicio ejecutivo, apoyando su pretension en los razonamientos consignados en sus escritos referidos, principalmente en la operacion de contabilidad que presenta á fojas 227 frente y vuelta, operacion que á su juicio demuestra matemáticamente estar pagada al Erario federal la deuda que se reclama á Cabrera, resultando además un saldo considerable en favor del Estado, y contra el Gobierno federal.

El C. Promotor fiscal ha sostenido, que apesar de los razonamientos del abogado de Cabrera, de los documentos presentados por este y de la operacion de contabilidad, no ha desvirtuado el ejecutado la accion ejecutiva entablada en su contra, á virtud de la sentencia ejecutoria que lo condeno á pagar los cuatromil cincuenta y dos pesos quince centavos (\$4052 15 cs.)

El Juzgado, Considerando; 1º: que el presente juicio ejecutivo se ha seguido en legal forma; 2º: que la accion ejecutiva ejercitada por el C. Promotor fiscal de Hacienda emana de una sentencia que ha causado ejecutoria en segunda instancia, previo el juicio plenario en que ya se ventiló la excepcion de pago opuesta por el demandado; 3º: que dicha accion ejecutiva no se ha desvirtuado por la excepcion de pago opuesta, por que ni los documentos que como pruebas ha presentado últimamente el deudor, ni los razonamientos de su abogado, demuestran patentemente estar justificada dicha excepcion, menos cuando la cuenta general formada por el C. O' Reilly, se refiere á la suma de caudales pertenecientes á la federacion por diversas causas, y no por la especial de 25 por ciento adicional de que hoy se trata; y además esa misma cuenta formada por el C. O' Reilly se refiere á cortes de caja de diferentes épocas, anteriores unas y posteriores otras á la fecha en que resultó el cargo que hoy se demanda al ejecutado; 4º: que para convencerse de

TOME VI.—PARTE II.

que no pueden concretarse á ese mismo cargo ni la cuenta general del C. O' Reilly, ni los documentos en que pretende apoyarse, basta hacer un cotejo de sus fechas y de las causas diversas de los caudales administrados, que lo son las rentas federales por diversos ramos que estuvieron á cargo de D. Caralampio Cabrera, como Administrador de rentas de Ciudad Guzman, cuya cuenta general, si es que no esta practicada por quien corresponde y en la forma debida, solo podrá producir en favor del Estado el saldo de diez y siete mil doscientos veintidos pesos sesenta y siete centavos, (\$17222 67 cs.) cuando sea glosada debidamente; 5º: que por hoy solo podrá presumirse ese saldo, mas no tenerse como plenamente probado; 6º: que tal presuncion no destruye por lo mismo la evidencia del crédito demandado ejecutivamente como justificado por la ejecutoria; por tanto, y con fundamento de las leyes 1ª y 12, tít. 28 lib. 11 de la Nov. Rec, falla con las proposiciones siguientes.

Primera: Llévase adelante la ejecucion decretada contra D. Caralampio Cabrera por la cantidad de cuatro mil cincuenta y dos pesos quince centavos, (\$4052 15 cs.) que debe al Erario federal por el ramo del 25 por ciento adicional, y las costas de este juicio.

Segunda: Hágase transe y remate de los bienes ejecutados, y demas que lo fueron embargados hasta cubrirse la deuda, costas causadas y que se causaren hasta el fin de la ejecucion.

El C. Juez 1º suplente por licencia del propietario, lo sentenció y firmó.—Firmados.—*José M. Gutierrez Hermosillo.*—*G. J. Gallegos.*

Es copia. Guadalajara, Febrero 21 de 1872.—*G. J. Gallegos.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guadalupe, Setiembre 17 de 1872.—
D. Caralampio Cabrera, Administrador de rentas del Estado, de Ciudad Guzman, ha sido procesado por delito de peculado á poderimento del C. Juan Robles Martinez, que era Promotor fiscal de la federacion cuando se dió principio á esta causa.

Entonces fundó su acusacion dicho Promotor, en que habiendo demandado civilmente á Cabrera, ante el Juzgado de Distrito el pago de un descubierito que resultó contra el demandado, procedente del 25 por ciento federal impuesto por la ley de 16 de Diciembre de 1861, cuyo descubierito correspondía á los catorce meses transcurridos de Enero 1868 á Febrero de 1869; el réo fué condenado en 1ª instancia á pagar al Erario federal la cantidad de cuatro mil cincuenta y dos pesos quince centavos (\$4052 15 es.) sentencia que fué confirmada en 2ª instancia por el Tribunal Superior de Circuito de esta Capital á 16 de Mayo de 1871; habiendo causado ejecutoria esa última sentencia de 2ª instancia; el fundamento pues de la acusacion criminal contra Cabrera, no fué otro mas que las dos sentencias mencionadas que se pronunciaron en un juicio civil; y las aseveraciones del Promotor fiscal apoyadas en su sola presuncion de que el acusado habia dispuesto en su propio provecho de los (\$4052 15 es.) á que se le condenó pagar.

El Juzgado de Distrito, á virtud de tal acusacion y teniendo presentes las prescripciones de la ley de 16 de Diciembre de 1861, contra los empleados y agentes de las rentas federales, prescripciones que invocó el Promotor para fortalecer su acusacion, procedió criminalmente contra D. Caralampio Cabrera; sentó desde luego el correspondiente auto cuba de proceso; le tomó inquisitiva al acusado y siguió la causa, practicando todas las diligencias conducentes al esclarecimiento del delito de peculado, hasta tomar confesion con cargo al réo.

De las constancias procesales aparece bien demostrado, que no está probado en la causa el encargo del delito de peculado, y por lo mismo menos lo está ese delito, pues que falta la existencia comprobada del hecho en que consiste el peculado, que lo es: "La sustraccion de caudales del Erario público hecha por las mismas personas que los manejan."

Del contesto de las constancias judiciales solo resulta, que demandado D. Caralampio Cabrera (civilmente) por el pago del descubierito que apareció en catorce meses transcurridos de su administracion, que le fueron de Enero de 1868 á Febrero de 1869, su apoderado ofreció pagar á quince dias de plazo ese descubierito que fué la base de las sentencias de 1ª y 2ª instancia que se han mencionado y en virtud de márgen al proceso; mas debe notarse, que la obligacion y accion conclusivas, ambas civiles, que nacieron de las sentencias judiciales basadas en el ofrecimiento de pagar los cuatro mil cincuenta y dos pesos quince centavos (\$4052 15 es.) hecho por el apoderado del Sr. Cabrera, no reconocen mas origen ni mas causa que ese mismo ofrecimiento, el cual puede reducirse en último termino legal, á un pacto celebrado entre el apoderado de Cabrera que ofreció y el Promotor fiscal que aceptó el ofrecimiento; pero de ahí no puede ni debe inferirse que haya nacido accion criminal alguna contra el expresado Cabrera, menos cuando este ha negado que su representante hubiera tenido instrucciones para haber hecho aquel ofrecimiento, pues asegura que nunca lo facultó para ello ni le dió ni podía darle, semejantes instrucciones, supuesto que no solo no se crea descubierito, sino al contrario, juzgaba tener un alcance á su labor y contra las rentas federales, por tanto que fuertemente hacia, en empeñando su crédito particular, por satisfacer á don A. de pago que apremiantemente se le exigian, estando exhaustas las rentas; así lo ha explicado satisfactoriamente el referido Sr. Cabrera

en su informe y verbal rendido al tiempo de la vista y comprobado con el estado general y extracto que se registran de la foja 91 á la 93 de esta causa, donde se ven las operaciones aritméticas que ponen de manifiesto el buen manejo de los caudales públicos que estuvieron á cargo del Sr. D. Caralampio Cabrera desde Enero de 1867 hasta Mayo de 1870 en que fué separado de la Administración de rentas de Ciudad Guzman; tambien debe notarse, que no la diferencia de catorce meses intermedios, sino lo que resultan de todo el tiempo de la administracion, debía dar el saldo deudor ó acreedor del Sr. Cabrera, puesto que así lo exigen los principios de buena contabilidad en el órden administrativo; y que ya se vé por el estado general y extracto de que se ha hecho mérito, fijas 91 á 93, que el Sr. Cabrera tiene un alcance á favor del Estado y contra el Erario federal, de veintitres mil quinientos diez y ocho pesos treinta y cuatro centavos (\$23518 34 cs.) resultando así cubierta suficientemente la responsabilidad del acusado; por tanto, y Considerando el Juezador:

Que en la presente causa falta la base principal é indispensable del procedimiento criminal, que lo es la comprobacion del cuerpo del delito.

Que sin ese requisito no puede tenerse por probada la existencia del mismo delito.

Que no habiendo delito justificado no puede haber delincuente.

Que las sentencias de 1ª y 2ª instancia en el juicio civil, aunque condenatorias á virtud de un pacto, no pueden ni deben absolutamente haber producido la supuesta accion criminal que indubidamente se ha ejercitado contra D. Caralampio Cabrera por delito de peculado, ni aun teniéndose presentes las prescripciones de la ley de 16 de Diciembre de 1861, las cuales no han derogado ni pueden derogar los principios invariables del derecho, ni las prescripciones de las demás leyes que constituyen la naturaleza de los verdaderos delitos.

Que en el proceso no solo no aparecen sospechas de criminalidad contra el acusado, sino que al contrario, estan bien justificadas su inocencia y honradéz; y con fundamento de la ley 26 tit 1º part. 7ª, falla con las proposiciones siguientes:

Primera: se absuelve á D. Caralampio Cabrera del cargo que se le ha hecho por delito de peculado, con expresa declaracion de que todo lo practicado no perjudica la buena reputacion de que siempre ha gozado.

Segunda: Notifíquesele esta sentencia y al C. Promotor fiscal, remitiéndose la causa al Tribunal Superior de Circuito para su revision.

El Juez 1º suplente de Distrito, lo sentenció por recusacion del propietario, y firma con testigos de asistencia, por recusacion tambien del Escribano actuario.—*José M. Gutierrez Hermosillo.*—A.—*Crescenciano Rincón.*—A.—*Antonio Baez.*

Es copia. Guadalajara, Marzo 1º de 1874.—*G. J. Gallegos.*

Sentencia del Tribunal de Circuito.

El C. Promotor de la Federacion, demandó á D. Caralampio Cabrera Administrador de rentas del Estado, en Ciudad Guzman, el pago de cuatro mil quinientos tres pesos treinta y un centavos, procedentes de la contribucion federal del veinticinco por ciento adicional impuesto por la ley de 16 de Diciembre de 1861, que importó la suma de diez y seis mil seiscientos setenta y dos pesos cincuenta y seis centavos, en catorce meses transcurridos desde Enero de 68 á 69, de los cuales no entregó en la oficina del papel sellado, la suma que se le demanda.

El Sr. Cabrera fué citado en forma para la contestacion de la demanda; pero no habiendo comparecido dentro de los terminos legales que para tal objeto le fueron concedidos, se le declaró rebelde á peticion

contraria, y el juicio se abrió á prueba por un termino prudente y prorogable por todo el de la ley.

En tal estado se presentó el Lic. D. Urbano Gomez con poder bastante del C. Cabrera, pidiendo prorroga del termino probatorio; y habiéndoselo concedido, justificó dentro de él la entrega de cuatrocientos setenta y un pesos diez y seis centavos.

Hecha la publicacion de probanzas, el Juez citó á las partes para una junta conciliatoria, en la que la demandada ofreció satisfacer la suma que se le exige, dentro del termino de quince dias.

No habiendo cumplido con este ofrecimiento, á petición del actor se citó para sentencia, la cual se pronunció condenando al Sr. Cabrera al pago de cuatro mil cincuenta y dos pesos quince centavos, á que quedó reducida la suma demandada, despues de rebajada la que aquel Sr. justificó haber satisfecho. Tambien se mandó compulsar testimonio de lo conducente de la actuacion, para la iniciacion del juicio de responsabilidad criminal contra el mismo Sr. Cabrera.

Su apoderado apeló de estas dos determinaciones de la sentencia; y despues de varios trámites y de haber sido recusado sin causa el Magistrado que conocía del negocio en segunda instancia, los autos han venido á conocimiento del que suscribe por escusa del C. Perez Verdía, á quien le correspondía por órden.

En esta segunda instancia se concedió el término probatorio á petición del apoderado del Sr. Cabrera; y practicadas varias diligencias á petición del mismo con la mira de justificar la entrega que dice haber hecho en la oficina principal de rentas del Estado, no solamente de la suma que se le demandó, sino además, la de mil doscientos treinta y cinco pesos treinta y tres centavos, que pide por vía de reconvenccion, sean pagados por la Jefatura de Hacienda, se citó para sentencia, despues de mandarse practicar una diligencia para mejor proveer.

El Magistrado que suscribe considera; 1º: que hay prueba plena de que D. Caralampio Cabrera adeuda al Erario federal la suma de cuatro mil cincuenta y dos pesos quince centavos, procedentes de la contribucion del 25 por ciento adicional que recaudó en catorce meses transcurridos desde Enero de 68 á 69; 2º: que no ha justificado haber hecho el pago en la forma que la ley establece, ni en la oficina correspondiente de papel sellado; 3º: que aunque lo hubiera hecho en una oficina del Estado, cosa que no ha justificado, esto no le eximía de responsabilidad, por que en la recaudacion de aquel impuesto, fué agente de la administracion federal y no de otra, y debía por lo mismo someterse en todo á lo dispuesto por la ley de 16 de Diciembre de 1861; 4º: que siempre que hay presunciones de que un empleado ha infringido la ley, ó incurrido por esto en responsabilidad, debe practicarse de oficio la averiguacion correspondiente.

Por lo expuesto, y con fundamento de la ley 16 de Diciembre de 1861, y 2º tít. 16 lib. 11 de la Nov. Rec. y confirmando en todas sus partes la sentencia de 1ª instancia, el mismo magistrado falla con las disposiciones siguientes.

Primera: se condena á D. Caralampio Cabrera, Administrador de rentas de Ciudad Guzman, á pagar al Erario de la Federacion la suma de cuatro mil cincuenta y dos pesos quince centavos.

Segunda: fórmesele el correspondiente juicio de responsabilidad, compulsándose al efecto testimonio de lo conducente de esta actuacion y dándose cuenta, para proveer.

Tercera: sáquense las copias y testimonios correspondientes, y rémitanse á su destino, como se previene en la circular relativa.

Notifíquese. El Magistrado suplente juzgando en definitiva lo decretó y firmó.—*J. M. Ignacio Garibay.*—*Tomás Bravo,* secretario.

Es copia.—*Tomás Bravo,* secretario.

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Guadalajara, 17 de Febrero de 1874.— Vista esta causa seguida contra D. Caralampio Cabrera, Administrador que fué de rentas de Ciudad Guzman, por imputársele mala versacion del fondo perteneciente al veinticinco por ciento adicional en el tiempo transcurrido de Enero de 1868 á Febrero de 1869. Vista la sentencia pronunciada en 1ª instancia á 17 de Setiembre de 1872, por la cual se absolvió del cargo al acusado, declarando que el proceso no litiga perniciio alguno á su buena reputacion y fama, con cuya resolucion se conformó expresamente la parte demandada, manifestando el C. Promotor fiscal, que al tiempo de la revision alegaría lo que juzgase conveniente, sin interponer el recurso de apelacion. Vistas las diligencias practicadas en esta 2ª instancia, con los alegatos presentados por ambas partes; oido el informe que al tiempo de la vista hizo el Lic. D. Francisco O' Reilly, defensor del reo.

Considerando; primero: que si bien es cierto que el juicio civil seguido contra el acusado terminó por el ofrecimiento que hizo el Lic. D. Urbano Gomez á nombre de D. Caralampio Cabrera, de pagar la cantidad que á este se le reclamaba, por cuyo motivo se le condenó en 1ª y 2ª instancia á enterar al Erario federal la suma de cuatro mil cincuenta y dos pesos quince centavos con deducción de la de cuatrocientos sesenta y un pesos diez y seis centavos que justificó haber entregado con anterioridad; ni ese reconocimiento ni la sentencia ejecutoria que á consecuencia de él recayó, cualesquiera que sean los efectos que produzcan en lo civil, no pueden servir de base para condenar en causa criminal, primero: porque á tal reconocimiento no deben atribuírsele otros efectos que excedan del motivo y objeto con que fué hecho, á saber: las relativas á la responsabilidad puramente civil; segundo: porque si tales antecedentes debieran servir por sí solos para decidir sobre el

punto criminal, inútil habria sido la formacion de la causa, y si esta se ha organizado y así la dispuso la misma ejecutoria de que antes se habló, es por que se la estimó, y con razon, que era preciso buscar otros datos sobre la criminalidad del acusado; tercero: porque prescindiendo de que el Lic. D. Urbano Gomez se haya ó no conformado con las instrucciones de su poderdante, al reconocer el cargo y comprometerse á satisfacerlo, tal reconocimiento no tiene valor en causa criminal, pues las confesiones como todos los actos de un juicio semejante, deben ejecutarse para que sean válidos, por las partes directamente, sin que se admita personero, como lo dispone la ley 11 título 5º partida 3ª, y se deduce de las doctrinas del Sr. Peña y Peña, tomo 1º página 292, número 33 de sus lecciones de "Práctica forense;" y cuatero: porque aun suponiendo que existiese una confesion de culpabilidad, lo que está muy lejos de suceder, la confesion del acusado sin la prueba de la existencia del cuerpo del delito, no basta nunca para condenar, por ser esa prueba la base fundamental del procedimiento. Así lo asienta el Sr. Escribano, artículo "Cuerpo del delito" y la generalidad de los autores, fundándose en la ley 5ª título 13 partida 3ª, y aquí falta de todo punto ese importante fundamento, como en seguida se demostrará, pues ademas, ni aun se le puede imputar en este caso al Sr. Cabrera la infraccion de la parte penal de la ley de 16 de Diciembre de 1861, supuesto que estaban suspensos sus efectos en aquella época de transicion, en virtud del estado de sitio y de las facultades extraordinarias de que estaba investido y ejercia el Jefe del Ejército Nacional.

Considerando, segundo: que habiéndose abandonado el reconocimiento hecho por D. Urbano Gomez, por actos muy explícitos de ambas partes sancionados por las providencias judiciales en 1ª y 2ª instancia, se planteó la averiguacion en otro terreno y se juzgó indispensable examinar el manejo del

Sr. Cabrera, no en un período aislado de su administración, sino en todo el tiempo que estuvo encargado de ella; y después de multiplicados trámites, no se ha llegado á decretar, no ya que haya cometido el crimen de peculato, pero ni siquiera que existiese ningún déficit que esté obligado á cubrir.

Considerando, tercero: que los de esa ha comprobado con la certificación testimonial y visible á folios 52, que en 31 de Diciembre de 1868 remitió á la Dirección de Rentas del Estado, en documentos de pago pertenecientes á la Gaceta de Hacienda, cincuenta y seis mil trescientos cuatro pesos sesenta y ocho centavos, cuyos valores le fueron abonados.

Considerando, cuarto: que en oficio de 12 de Mayo de 1870, folios 27 vuelta, á consecuencia de una Orden del Gobierno del Estado, fecha 9 del mismo mes, la expresada Dirección dice haber dispuesto se hiciese cargo á la Gaceta de Hacienda del importe de los documentos de pago, de los documentos que se le remitieran con solo los acuse de recibo, y que así mismo se aborran los precedentes de las oficinas foráneas; pero á reserva unos y otros del resultado del exámen que de ellos se practicase, manifestando en la propia comunicación, que se abandonaba el sistema natural de contabilidad, lo que prueba que esta medida era excepcional y se tomaba entonces para lo sucesivo, sin que haya motivo alguno para creer, que el certificado que con mucha antelación se expidió á D. Onalampio Cabrera, se haya otorgado en consonancia con los principios en que se fundó dicha Orden, pues no se hace mérito en tal documento de semejante restricción; y por lo mismo, es inconcuso que se extendió según el orden natural de la contabilidad, de que no se creyó conveniente prescindir sino dos años más tarde, siendo por consecuencia inconcuso que la mencionada certificación no acusa recibo de documentos sujetos á exámen, sino de los valores que expresan, porque el orden natural de contabilidad tiene estableci-

do, que ninguna oficina otorgue finquitos, sino previo el exámen y aprobación de las respectivas cuentas.

Considerando, quinto: que habiéndose hecho en una gran parte del tiempo de la administración del Sr. Cabrera, la remisión de ventaneros por cuenta federal, no en papel como lo previene la ley de la materia, sino en duplicado, de conformidad con la Orden que en virtud de las circunstancias arribadas de aquella época y de especiales autorizaciones expidió la Comandancia militar del Estado con fecha 25 de Enero de 1867 (folios 27 frente) no pudo el administrador remitir como comprobante el papel federal amortizado, sino dar la cuenta de ingresos y egresos de este ramo, en la forma común á la Dirección, con cuya oficina se entendía como única superior en este mismo ramo, por estar entonces centralizadas y controladas las rentas del Estado y las federales, con motivo del estado de sitio y lo extraordinario de la situación política, siendo consecuencia de esta, que el finquito de dicha oficina superior cuora la responsabilidad de su subalterna.

Considerando, sexto: que buscando completa claridad para la resolución del negocio, este Tribunal ha dirigido diversas Órdenes á la Gaceta de Hacienda, á fin de que haga un examen de los documentos del Sr. Cabrera, y emita su opinión; estas Órdenes no se han cumplido, no obstante haber transcurrido muchos meses, apesar de los términos apremiantes en que fueron concebidas.

Considerando, séptimo: que el Tribunal ha agotado sus esfuerzos en este sentido y ha perdido la esperanza de que den su resultado dentro de un tiempo en que fuera posible aguardar y tener pendiente la resolución del negocio, sin perjuicio de la buena administración de justicia y de los derechos del acusado, quien evidentemente los tiene para no estar sujeto á juicio indefinidamente, sufriendo en sus intereses pecunarios, en su honor, en su libertad y familia, las consecuencias de semejante situación.

Considerando, octavo: que este proceso ha durado mas de dos años; que segun las leyes 9ª, título 6º partida 6ª y 7ª título 2º partida 7ª, ningún juicio criminal puede pasar de este tiempo; pues si trascurrido él, la acusacion no se proba, el reo debe ser puesto en libertad; y si bien es cierto que los términos fijados á los procedimientos por las antiguas leyes, han dejado de observarse, no es porque se permita tener los juicios inconclusos sin limitacion, sino en virtud de que las disposiciones modernas que los reglamentan, tienen tomadas medidas para abreviarlos, siendo obligacion estrecha de los jueces, procurar la pronta terminacion de los criminales y de Hacienda pública, como lo enseña el estado Peña y Peña en la página 16 tomo 1º de su obra antes mencionada.

Considerando, noveno: que si segun el C. Promotor fiscal, el exámen y calificacion del documento exhibido por el acusado, son de importancia en el negocio, debe ser porque sin estas operaciones no se puede venir en conocimiento de si el Sr. Cabrera dejó descubierta su responsabilidad; y si esto no se dá por probado, mal se puede concluir con que se pronuncie sentencia condenatoria á falta de dichas diligencias.

Considerando, décimo: que por una parte, al actor incumbe la prueba, debiéndose, en caso que no se rinda, absolverse al reo por la presuncion de inocencia, que siempre obra en su favor; y por otra, en materia criminal esta prueba debe ser clara y concluyente, en la que no quiepa duda, por tanto así expresamente ordenado varias leyes, entre otras, la 12 título 14 partida 2ª; por todas estas razones, y no encontrando el Juez que suscriba la prueba del delito porque ha sido acusado el reo de esta causa, en infraccion de la ley de 16 de Diciembre de 1861 en la parte penal, pronunciar su sentencia definitiva en los términos que expresan las proposiciones siguientes, con fundamento de la ley 26 título 1º partida 7ª.

Primera: Se absuelve del cargo de pecu-

lado que se ha hecho en el presente juicio, al ex-administrador de rentas de Ciudad Guzman D. Camalupio Cabrera, y se declara, que el proceso que ha sufrido no infla ningún perjuicio á su buena reputacion y fama.

Segunda: Lo dispuesto en la anterior proposicion, no innova la sentencia pronunciada en el juicio civil, cuya ejecutoria queda en todo su vigor.

Tercera: Sendo conforme de toda conformidad esta sentencia con la de 1ª instancia, ejecútese y remítase la causa á la Corte Suprema de Justicia para los efectos legales consiguientes.

Cuarta: Notifíquese. Así lo decretó el Magistrado 2º suplente de este Tribunal y firmó.—*Leonardo Angulo*—*Tomas Bravo*, secretario.

Es copia que certifico. Guadalajara, 27 de Febrero de 1874.—*Tomas Bravo*, secretario.

Pedimento del C. Procurador general de la Nacion.

El Procurador general interno, dice: que en 17 de Agosto de 1871 á pedimento del Promotor fiscal del Juzgado de Distrito de Guadalajara, se formó causa en el mismo Juzgado á D. Camalupio Cabrera por el delito de peculado, que se hacen consistir en que el reo durante el tiempo que estuvo como administrador de rentas en Ciudad Guzman, dispuso á su favor de cuatro mil cincuenta y dos pesos quince centavos.

Practicada la averiguacion en debida forma, dicho Juzgado en 17 de Setiembre de 1873 absolvió á Cabrera del cargo, cuya determinacion fué confirmada por el Tribunal de Circuito respectivo en 17 de Febrero del corriente año.

El que suscribe, considerando arreglada á derecho esa determinacion que carece ejecutoria, segun lo dispuesto en el artículo 21 de la ley de 14 de Febrero de 1826, y

no encontrando motivo para exigir la responsabilidad á los jueces que intervinieron en este proceso, pide á esta 1.^a Sala se sirva darlo por revisado.

México, 9 de Abril de 1874.—*García Ramírez.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, 10 de Abril de 1874.—Por revisado, y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan José de la Garza.*—*Ignacio Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico México, 30 de Abril de 1874.—*Alejo Gomez Eguarte*, oficial mayor.

CRIMINAL.

Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Tlaxcala, contra D. Agustin Sierra y Sesma, por peculado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor dice: que en ese Juzgado de su digno cargo, se ha instruido causa por peculado á D. Agustin Sierra y Sesma, por no aparecer en los libros de la Gefatura de Hacienda, asentadas las partidas de enteros de la cantidad de cuatrocientos ochenta y cuatro pesos, cincuenta centavos, de la redencion que el C. Diego V. Lira hizo del capital de (\$1900) mil novecientos pesos, que reconocia el rancho de Astorga ubicado en este Estado.

Consta de la causa, fojas 3 frente y vuelta, que D. Agustin Sierra y Sesma reconoció como suyas las firmas que cubren los recibos, que el C. Diego V. Lira presentó

en fé de haber cubierto la cantidad de cuatrocientos ochenta y cuatro pesos cincuenta centavos que adeudaba por la redencion del rancho de Astorga.

Consta tambien por las declaraciones é informes unánimes de los CC. Melquiades Carvajal Gobernador del Estado, Ignacio Torrelblanca, Miguel Lira y Ortega, General Antonio Rodriguez Bocardo, Juan Francisco Gavilón, Juan F. de Lara, Manuel Córdova, y el certificado del actuario del Juzgado, que cuando el finado D. Miguel Sesma, sirvió á la Gefatura de Hacienda, habia un gran desórden en ella, y que dicho individuo, ya por su falta de órden, como por las circunstancias de la guerra, recibia pagos pertenecientes á la oficina, en cualquier parte, y aun en las mesas de juego; y que despues daba órden á su sobrino D. Agustin Sierra y Sesma, para que estendiese recibos.

De la declaracion del C. Manuel Camacho, resulta: que el dincio que entregó por D. Diego V. Lira, lo recibió D. Miguel Sesma.

De la confesion con cargos, aparece que D. Agustin Sierra y Sesma firmó los recibos; pero lo hizo por mandato de su Gefere que no podia saber, si hacia bien ó mal en firmarlos por su poca edad, falta de experiencia y por la confianza ciega que tenia en su tio D. Miguel Sesma, y que si no aparecen cargadas esas partidas en los libros de la oficina, es por el mucho abandono de D. Miguel Sesma.

Por lo expuesto, lo primero que debemos ver, es, ¿que cosa sea peculado? y segundo, examinar si D. Agustin Sierra y Sesma es reo del delito de peculado. El Código penal vigente define así dicho delito, diciendo que: "*Es el que comete toda persona encargada de un servicio público, aunque sea en comision por tiempo limitado y no tenga el carácter de funcionario, que para usos privados propios ó ajenos, distraiga de su objeto dolosamente el dinero, valores, fincas ó cualquiera otra cosa perteneciente á la Nacion, á un municipio ó á un particular, si por razon de su encargo los hubiere recibido en ad-*